

PRECIOS Y PUNTO DE SUSCRIPCION

Trimestre	15 pesetas
Semestre	30 —
Anual	50 —

Las suscripciones se solicitarán de la *Inspección de Falleres del Hogar Pignatelli*, calle Pignatelli, 99.

Las de fuera podrán hacerse remitiendo el importe por giro postal u otro medio.

Todos los pagos se verificarán en la *Depositaria de fondos provinciales (Diputación Provincial)*.

Los números que se reclamen después de transcurridos *cuatro días* desde su publicación, sólo se servirán al precio de venta, o sea a 50 céntimos los del año corriente; 0'75 ptas., los del año anterior, y de otros años, una peseta.



PRECIOS DE LOS ANUNCIOS

Por cada línea o fracción que ocupe cada anuncio o documento que se inserte, 1'50 pesetas. Al original acompañará un sello móvil de UNA peseta por cada inserción.

Los derechos de publicación de números extraordinarios y suplementos serán convencionales, de acuerdo con la entidad o particular que lo interese.

Los anuncios obligados al pago, sólo se insertarán previa abono o cuando haya persona en la capital que responda de éste.

Las inserciones se solicitarán del Excmo. Sr. Gobernador, por oficio; exceptuándose, según está previsto, las de la primera Autoridad militar.

A todo recibo de anuncio acompañará un ejemplar del BOLETIN respectivo como comprobante, siendo de pago los demás que se pidan.

Tampoco tienen derecho más que a un solo ejemplar, que se solicitará en el oficio de remisión del original, los Centros oficiales.

El BOLETIN OFICIAL se halla de venta en la Imprenta del Hogar Pignatelli.

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

ESTE PERIÓDICO SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, EXCEPTO LOS DOMINGOS

Inmediatamente que los señores Alcaldes y Secretarios reciban este BOLETIN OFICIAL, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del siguiente.

Los señores Secretarios cuidarán, bajo su más estrecha responsabilidad, de conservar los números de este BOLETIN, coleccionados ordenadamente para su encuadernación, que deberá verificarse al final de cada semestre.

Las leyes obligan en la Península, islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos a la legislación peninsular, a los veinte días de su promulgación, si en ellas no se dispusiese otra cosa. (Código civil).

Las disposiciones del Gobierno son obligatorias para la capital de provincia desde que se publican oficialmente en ella, y desde cuatro días después para los demás pueblos de la misma provincia. (Ley de 3 de noviembre de 1887).

PRESIDENCIA DE LA JUNTA TECNICA DEL ESTADO

COMISION DE CULTURA Y ENSEÑANZA

ORDEN CIRCULAR

Vistas las consultas dirigidas a esta Comisión sobre el modo de suplir la partida de nacimiento y, a falta de ella, la de bautismo de los alumnos nacidos en territorio no liberado, esta Comisión ha acordado que la personalidad de los alumnos se acreditará, en tales casos, mediante declaración jurada del padre o tutor del interesado, acompañada de la firma de dos testigos solventes.

Burgos, 3 de abril de 1937.— El Vicepresidente, Enrique Suñer.

Sres. Directores de los Centros dependientes de la Comisión de Cultura y Enseñanza.

GOBIERNO GENERAL

ORDEN

Como consecuencia de las numerosas solicitudes formuladas para acoger niños huérfanos y abandonados, de conformidad con la Orden de este Gobierno General de 30 de diciembre de 1936 (B. O. núm. 74), se hace preciso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.º de la referida disposición, dictar las instrucciones ampliatorias conducentes a la completa implantación de este importantísimo servicio de "Colocación Familiar".

A este fin, vengo en disponer:

Artículo 1.º Sin perjuicio de la adopción legal que regula el Código Civil en sus artículos

173 y siguientes del capítulo 5.º, título 7.º, del libro 1.º y disposiciones concordantes con los mismos, que podrán ejercer en cualquier momento las personas que habiendo acogido niños tengan a ello derecho, los menores a quienes se refiere esta disposición podrán ser recibidos en cualquiera de las dos formas siguientes:

A) Con carácter permanente.

B) Con carácter temporal hasta la edad o momento que en cada caso se estipule.

Artículo 2.º Para la colocación se dará preferencia a los solicitantes comprendidos en el apartado A) del artículo anterior, permitiéndoles elegir libremente, con arreglo a las características de sexo, edad y demás que deseen, entre los niños que como posibles adoptados, de acuerdo con el artículo 3.º de la referida Orden de 30 de diciembre último, existan en su provincia o en cualquiera otra de las liberadas.

Artículo 3.º Para ser acogidos con carácter permanente se destinarán en primer lugar los niños huérfanos de padre y madre abandonados o aquellos otros que, encontrándose igualmente abandonados, se desconozca la existencia de sus familiares obligados por ley a su sostenimiento. Solo a falta de éstos, y a petición del solicitante, podrán acogerse los que no reúnan estas condiciones, previo consentimiento de la persona llamada a ejercer tutela, y con arreglo a las disposiciones legales vigentes.

Artículo 4.º La persona que sin estar obligada por la ley a su sostenimiento venga atendiendo voluntariamente a algunos de los niños comprendidos en esta disposición tendrá derecho preferente para su acogimiento permanente o temporal, siempre que, a juicio de la Junta local correspondiente, reúna las condiciones de moralidad y demás exigidas para la colocación familiar.

Artículo 5.º Para determinar los niños que puedan ser objeto de colocación familiar y las preferencias que se señalan en los artículos anteriores, las Juntas locales de Colocación Familiar formarán en el mes de enero de cada año un padrón duplicado de los niños abandonados que existan dentro del territorio de su jurisdicción, conservando en su poder uno de los ejemplares y remitiendo el otro a la Junta provincial de Beneficencia correspondiente.

En el mes de febrero siguiente, las Juntas provinciales de Beneficencia remitirán al Gobierno General el padrón-resumen de los remitidos por la totalidad de las Juntas locales de su jurisdicción.

Artículo 6.º Los referidos padrones serán la base para formular las peticiones de acogimiento de niños, las cuales podrán hacerse en cualquier época del año ante la Junta local donde el peticionario resida. Esta la informará con los datos adquiridos sobre el solicitante durante su permanencia en la zona de jurisdicción, si ésta fuera de dos años como mínimo, completándolos en otro caso con el informe de la Junta o Juntas locales donde anteriormente hubiera residido.

La solicitud se hará con arreglo al formulario modelo número 1, a cuyo dorso irán los informes a que se refiere el párrafo anterior.

Emitido el informe por la Junta Local, lo que deberá hacer en el término de cinco días, ampliables en cinco y dos más de correo por cada una de las Juntas locales que haya de informar, lo remitirá a la Junta provincial de Beneficencia, para que resuelva lo procedente, en el plazo máximo de otros cinco días.

En el caso de que la Junta provincial acuerde acceder a lo solicitado designará el niño que reúna las condiciones exigidas por el peticionario si lo hubiere en la provincia, o, en otro caso, lo pondrá en conocimiento del Gobierno General para que éste indique la provincia que ha de facilitararlo.

Si el solicitante lo desea de otra provincia determinada, el Gobernador civil oficiará el acuerdo de concesión al de la elegida para que por su Junta provincial de Beneficencia sea designado el niño que reúna las condiciones que el peticionario señala.

Artículo 7.º La entrega se hará ante la Junta local correspondiente a la residencia del niño mediante acta que se extenderá en el libro foliado y sellado por la Junta provincial de Beneficencia que a estos efectos, y con sujeción al modelo número 2, se llevará en las Juntas locales de Colocación Familiar, remitiendo el Secretario en el plazo máximo de cinco días un testimonio de dicha acta a la Junta local a que pertenezca el peticionario, otro a cada una de las Juntas provinciales a que pertenezca el peticionario y el niño y el cuarto ejemplar al Gobierno General del Estado.

Artículo 8.º Las personas a quienes se haga entrega de niños en virtud de esta disposición están obligadas a darles instrucción escolar hasta los doce años como minimum, no pudiendo bajo ninguna causa ni pretexto hacer de los niños acogidos objeto de explotación alguna, debiendo prestarles los cuidados propios de un buen padre de familia.

Artículo 9.º Siendo la colocación familiar una forma de ejercer el Estado la tutela de los niños abandonados, por analogía con el principio

sustentado en el artículo 212 del Código Civil para la de los niños recogidos en establecimientos benéficos, la tutela correspondiente a los acogidos a esta disposición se ejercerá por las Juntas locales de Colocación Familiar bajo la inspección de la Junta provincial de Beneficencia y el Gobierno General del Estado, quienes investigarán en la forma que en cada caso crean más conveniente cómo cumplen aquéllas su obligación tutelar.

La representación en juicio de estos tutores estará a cargo del Ministerio fiscal.

Artículo 10. Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo 1.º del artículo anterior, las Juntas locales de Colocación Familiar quedan obligadas a vigilar si las personas que tienen los niños cumplen con los deberes contraídos de alimentarles, vestirles y educarles dentro de los más sanos principios de religión y moral cristiana, amor patrio, etc., corrigiendo las deficiencias que observen, y proponiendo en su caso a las Juntas provinciales de Beneficencia las sanciones que procedan, incluso la de retirar el niño entregado.

Las Juntas provinciales de Beneficencia comprobarán del modo que estimen más conveniente la veracidad de estas denuncias, y acordarán en cada caso la resolución que proceda.

Artículo 11. Si alguno de los niños colocados en virtud de esta disposición llegase en cualquier momento a poseer bienes, se constituirá el Consejo de Familia para la guarda de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil y disposiciones vigentes.

La persona que lo tenga a su cuidado tendrá obligación ineludible, en cuanto se dé el caso señalado en el párrafo anterior, de ponerlo en conocimiento de la autoridad correspondiente.

Artículo 12. Si en cualquier momento apareciese el padre o tutor legal de alguno de los niños abandonados que hayan sido colocados con arreglo a los preceptos de esta disposición, podrá reclamarlo, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y reglamentos vigentes.

Artículo 13. Cuando, en cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre protección a la infancia, las autoridades a quienes corresponda priven de los derechos sobre un menor a la persona llamada por ley a ejercitarlos, deberá darse cuenta a la Junta local de Colocación Familiar correspondiente, para que ésta incluya al niño en el padrón de "Colocación Familiar" y proceda, si corresponde, a su colocación.

Asimismo cuando dichas Juntas locales de Colocación Familiar tuvieran conocimiento de niños abandonados por sus familiares, excitarán el celo de las autoridades correspondientes para que por éstas se tomen las medidas oportunas.

Artículo transitorio. Teniendo en cuenta que para el año en curso están formados los correspondientes padrones, las Juntas provinciales de Beneficencia procederán con la máxima urgencia a la colocación de los niños abandonados, de acuerdo con los preceptos de esta disposición, dando cuenta mensual del número de colocados, sin perjuicio de ir remitiendo dentro de los plazos marcados los testimonios a que hace referencia el artículo 7.º de la misma.

Valladolid, 1 de abril de 1937.—El Gobernador general, Luis Valdés.

Modelo núm. 1

Petición de acogimiento de niños

D. _____, nacido el _____ de _____ en _____, provincia de _____, y con domicilio en _____, provincia de _____, de estado _____, que cuenta en la actualidad con _____ hijos y _____ hijas, de _____ edad los varones y _____ las hembras, respectivamente, a V. E., con el debido respeto, expone:

Que al amparo, de los preceptos de las Ordenes del Gobierno General del Estado fechas 30 de diciembre de 1936 y 1.º de abril de 1937 sobre recogida de niños huérfanos y abandonados,

SUPLICA le sea concedido, para acogerle con carácter $\frac{\text{permanente}}{\text{temporal}}$, un $\frac{\text{niño}}{\text{niña}}$ de _____ años, que se encuentra en _____, provincia de _____, comprometiéndose a cumplir fielmente las obligaciones que con dicho motivo imponen los preceptos legales.

Gracia que no duda alcanzar de V. S., cuya vida guarde Dios muchos años.

_____ de _____ de _____

El solicitante,

(Para colocar al dorso del anterior modelo).

Informes de las Juntas Locales a que se refiere el artículo 6.º de la Orden de 1.º de abril de 1937.

Concepto moral _____

Concepto religioso _____

Concepto económico, indicando ingresos _____

Informe sanitario _____

Resolución de la Junta _____

El Presidente,

El Secretario,

(Modelo de hoja para el Libro de Actas de entrega de huérfanos).

Año

Mes

Día

Nombre del adoptante:

Nombre del adoptado:

En....., provincia de.....
y fecha que arriba se indica, ante D.....

....., Presidente de la Junta Local de Colocación Familiar de este término, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.º de la Orden del Gobierno General de 1.º de abril de 1937,

Comparecen D..... y D.^a....., vecinos de....., con domicilio en....., para suscribir el acta correspondiente de acogimiento y entrega del niño....., hijo de..... y de....., fallecidos o de paradero ignorado. Nacido en....., provincia de..... el..... de..... de.....

Concurren a este acto, como testigos, D..... y D.....

El Sr. Presidente de la Junta Local hace a los comparecientes las advertencias procedentes y por el Secretario se da lectura de las órdenes relativas al acto que se celebra, terminado lo cual, se procede a hacer la entrega a los solicitantes, con las advertencias siguientes:

Primera. Que el acogimiento del niño es....., viniendo obligados a prestarle el cuidado debido, tanto sano como enfermo, vestirle, calzarle y educarle en los principios de la Religión Católica y el santo amor a la Patria, sin que puedan desposeerse de él bajo ningún concepto sin previa autorización de la Junta Provincial de Colocación Familiar.

Segunda. En caso de incumplimiento de las obligaciones que contraen, podrán ser privados del niño que se les entrega, exigiéndole las responsabilidades que procedan.

Tercera. Que no podrán poner obstáculo alguno a cuantas inspecciones se deseen hacer sobre el trato, salud y demás datos del niño entregado, por aquellas personas debidamente autorizadas para ello por el Gobierno General del Estado, Junta Provincial de Beneficencia o Junta Local de Colocación Familiar respectiva.

Cuarta. Que cuantos cambios de domicilio realicen, deberán notificarlos a la Junta Local, con indicación de la nueva residencia y domicilio.

Quinta. Que en caso de fallecimiento del acogido, deberá dar rápida cuenta a la Junta Local respectiva.

Sexta. Que en el caso de que el acogimiento temporal quisiera elevarse a definitivo, se solicitará de la Junta Local correspondiente, para que resuelva lo que proceda. Si en cualquier momento decide llevar a cabo la adopción legal a que se refiere el artículo 1.º de la Orden de 1.º de abril de 1937, comunicará a la Junta Local la fecha en que lo solicite de la autoridad a quien corresponda.

Séptima. En el caso de que los que acogen al huérfano o desamparado, empeorasen de fortuna, viéndose imposibilitados de prestarle toda la atención y cuidados a que se comprometen por

este acto, podrán solicitar la suspensión del acogimiento interesándolo de la Junta Local de Colocación Familiar, que resolverá lo que corresponda.

De la presente acta se dió lectura en voz alta por el Secretario que la extiende, y en prueba de conformidad de los concurrentes al acto, fué firmada por todos ellos, entregando un testimonio de la misma a D. _____, que se hace cargo del niño, de todo lo cual, como Secretario, certifico.

El Presidente de la Junta Local
de Colocación Familiar,

Los adoptantes,

Testigos,

El Secretario,

(Del Boletín Oficial del Estado núm. 168, fecha 6 de abril de 1937)

SECCION QUINTA

Núm. 2.046.

Sección Agronómica de Zaragoza

NITRATO DE SOSA DE CHILE.—Fijación del precio para el mismo.

Circular.

Según orden comunicada, con fecha 3 de los corrientes, por la Comisión de Industria, Comercio y Abastos de la Junta Técnica del Estado, el precio asignado al nitrato de sosa de Chile, con saco y por cien kilos, será el de 37'75 pesetas, en Zaragoza, sobre vagón, y el de 38'15 pesetas en el almacén del vendedor.

Lo que se hace público para general conocimiento y estricta observancia por todos aquellos a quienes afecta esta circular.

Zaragoza, 10 de abril de 1937.—El Ingeniero Jefe, Domingo Rueda y Marín.

Tribunal provincial de lo contencioso-administrativo de Zaragoza.

Núm. 2.004.

Cédula de notificación.

En el recurso contencioso-administrativo seguido ante este Tribunal, a instancia de D. Antonio Gotor Gimeno, contra acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, de 7 de diciembre de 1934, sobre separación del cargo que ocupaba en el servicio de limpieza

pública, se ha dictado providencia, con fecha de hoy, que a la letra dice:

«Desprendiéndose de cuanto obra en autos el hecho de hallarse el recurrente en ignorado paradero, requiérasele para que en el término de quince días comparezca en forma legal en el presente recurso, por sí mismo si residiere en Zaragoza, designando su domicilio en esta ciudad, o si su domicilio radicara fuera de esta capital, en los términos ordenados en el artículo 13 del Reglamento de procedimiento en materia municipal, en consonancia con el artículo 256 del Estatuto municipal, apercibiéndosele que si no lo verificara en el término dicho se le tendrá por decaído de su derecho, publicándose a tales efectos la oportuna cédula en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.»

Y para que sirva de cédula de notificación y requerimiento en forma, expido y firmo la presente en Zaragoza a 31 de marzo de 1937.—El Oficial del Tribunal, F. Martínez de Ercilla.

Núm. 2.004.

Cédula de notificación.

En el recurso contencioso administrativo promovido ante este Tribunal por D. Esteban Iglesias, don Paulino Ansó, D. Cesáreo Ansó y D. Juan Ansó, como presuntos representantes del Ayuntamiento de Sigüés, contra acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo provincial de 6 de marzo de 1936 resolviendo cuota asignada a varios contribuyentes por la Junta general de repartimientos de utilidades para el año 1935, este Tribunal, en 13 de junio de 1936, dictó providencia que a la letra dice:

«No acreditándose en el escrito que aparece firmado por D. Esteban Iglesias, D. Paulino Ansó, D. Cesáreo Ansó y D. Juan Ansó, la representación que dicen ostentar del Ayuntamiento de Sigüés, y no acompañándose a tal escrito inicial documento acreditativo del acuerdo de dicha Corporación, de interponer recurso contencioso-administrativo ni tampoco el traslado de la resolución, en su caso, recurrida, no ha lugar a ser tramitado el referido escrito por el procedimiento de esta jurisdicción.»

Y para que sirva de notificación a D. Paulino Ansó Iglesias, D. Juan Ansó Oyaga, extendiendo y firmando la presente cédula en Zaragoza a 8 de abril de 1937.—El Oficial del Tribunal, F. Martínez de Ercilla.

Núm. 2.044.

Por D. Ernesto Frisón Monteagudo se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra resolución del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, de 14 de febrero de 1937 por la que se ordenaba al recurrente llevar a cabo reparaciones en una finca de su propiedad sita en la Cartuja Baja.

Lo que se anuncia para conocimiento de los que tengan interés directo en el asunto y quisieran coadyuvar en él a la Administración.

Zaragoza, 9 de abril de 1937.—El Secretario del Tribunal, Ramón Morales.

Comisión Provincial de Incautaciones.

Núm. 1.943.

De conformidad con lo previsto en el art. 6.º del Decreto-ley de 10 de enero último, he mandado instruir expediente sobre declaración de responsabilidad civil contra Santiago Serrano Medrano, vecino de Cariñena, habiendo nombrado Juez instructor a D. Carlos Sanjuán de Pineda, que actuará en el Juzgado de instrucción de Cariñena.

Zaragoza, 3 de abril de 1937.—El Gobernador civil, Presidente de la Comisión, Julián Lasierra Luis.

Núm. 1.944.

De conformidad con lo previsto en el art. 6.º del Decreto-ley de 10 de enero último, he mandado instruir expediente sobre declaración de responsabilidad civil contra José Soler Benito, vecino de Cariñena, habiendo nombrado Juez instructor a don Carlos Sanjuán de Pineda, que actuará en el Juzgado de instrucción de Cariñena.

Zaragoza, 3 de abril de 1937.—El Gobernador civil, Presidente de la Comisión, Julián Lasierra Luis.

Núm. 1.945.

De conformidad con lo previsto en el art. 6.º del Decreto-ley de 10 de enero último, he mandado instruir expediente sobre declaración de responsabilidad civil contra Gregorio Oliván García, vecino de Cariñena, habiendo nombrado Juez instructor a D. Carlos Sanjuán de Pineda, que actuará en el Juzgado de instrucción de Cariñena.

Zaragoza, 3 de abril de 1937.—El Gobernador civil, Presidente de la Comisión, Julián Lasierra Luis.

Núm. 1.946.

De conformidad con lo previsto en el art. 6.º del Decreto-ley de 10 de enero último, he mandado instruir expediente sobre declaración de responsabilidad civil contra Manuel Sebastián Ferrer, vecino de Cariñena, habiendo nombrado Juez instructor a D. Carlos Sanjuán de Pineda, que actuará en el Juzgado de instrucción de Cariñena.

Zaragoza, 3 de abril de 1937.—El Gobernador civil, Presidente de la Comisión, Julián Lasierra Luis.

Núm. 1.947.

De conformidad con lo previsto en el art. 6.º del Decreto-ley de 10 de enero último, he mandado instruir expediente sobre declaración de responsabilidad civil contra Manuel Serrano Gálvez, vecino de Cariñena, habiendo nombrado Juez instructor a don Carlos Sanjuán de Pineda, que actuará en el Juzgado de instrucción de Cariñena.

Zaragoza, 3 de abril de 1937.—El Gobernador civil, Presidente de la Comisión, Julián Lasierra Luis.

Núm. 1.948.

De conformidad con lo previsto en el art. 6.º del Decreto-ley de 10 de enero último, he mandado instruir expediente sobre declaración de responsabilidad civil contra Manuel Soler Monfil, vecino de Cariñena, habiendo nombrado Juez instructor a D. Carlos Sanjuán de Pineda, que actuará en el Juzgado de instrucción de Cariñena.

Zaragoza, 3 de abril de 1937.—El Gobernador civil, Presidente de la Comisión, Julián Lasierra Luis.

Núm. 1.949.

De conformidad con lo previsto en el art. 6.º del Decreto-ley de 10 de enero último, he mandado instruir expediente sobre declaración de responsabilidad civil contra Joaquín Ruiz Tello, vecino de Cariñena, habiendo nombrado Juez instructor a D. Carlos Sanjuán de Pineda, que actuará en el Juzgado de instrucción de Cariñena.

Zaragoza, 3 de abril de 1937.—El Gobernador civil, Presidente de la Comisión, Julián Lasierra Luis.

Núm. 1.950.

De conformidad con lo previsto en el art. 6.º del Decreto-ley de 10 de enero último, he mandado instruir expediente sobre declaración de responsabilidad civil contra Saturnino Vélez Melendo, vecino de Cariñena, habiendo nombrado Juez instructor a D. Carlos Sanjuán de Pineda, que actuará en el Juzgado de instrucción de Cariñena.

Zaragoza, 3 de abril de 1937.—El Gobernador civil, Presidente de la Comisión, Julián Lasierra Luis.

Núm. 1.951.

De conformidad con lo previsto en el art. 6.º del Decreto-ley de 10 de enero último, he mandado instruir expediente sobre declaración de responsabilidad civil contra Santiago Moreno Gimeno, vecino de Cariñena, habiendo nombrado Juez instructor a D. Carlos Sanjuán de Pineda, que actuará en el Juzgado de instrucción de Cariñena.

Zaragoza, 3 de abril de 1937.—El Gobernador civil, Presidente de la Comisión, Julián Lasierra Luis.

Núm. 1.952.

De conformidad con lo previsto en el art. 6.º del Decreto-ley de 10 de enero último, he mandado instruir expediente sobre declaración de responsabilidad civil contra José Sanz Gracia, vecino de Cariñena, habiendo nombrado Juez instructor a D. Carlos Sanjuán de Pineda, que actuará en el Juzgado de instrucción de Cariñena.

Zaragoza, 3 de abril de 1937.—El Gobernador civil, Presidente de la Comisión, Julián Lasierra Luis.

Núm. 1.953.

De conformidad con lo previsto en el art. 6.º del Decreto-ley de 10 de enero último, he mandado instruir expediente sobre declaración de responsabilidad civil contra Antonio Loshuertos García, vecino de Cariñena, habiendo nombrado Juez instructor a don Carlos Sanjuán de Pineda, que actuará en el Juzgado de instrucción de Cariñena.

Zaragoza, 3 de abril de 1937.—El Gobernador civil, Presidente de la Comisión, Julián Lasierra Luis.

Núm. 1.954.

De conformidad con lo previsto en el art. 6.º del Decreto-ley de 10 de enero último, he mandado instruir expediente sobre declaración de responsabilidad civil contra Nicolás Moreno Gimeno, vecino de Cariñena, habiendo nombrado Juez instructor a D. Carlos Sanjuán de Pineda, que actuará en el Juzgado de instrucción de Cariñena.

Zaragoza, 3 de abril de 1937.—El Gobernador civil, Presidente de la Comisión, Julián Lasierra Luis.

Núm. 1.955.

De conformidad con lo previsto en el art. 6.º del Decreto-ley de 10 de enero último, he mandado instruir expediente sobre declaración de responsabilidad civil contra José Cameo Blas, vecino de Cariñena, habiendo nombrado Juez instructor a D. Carlos Sanjuán de Pineda, que actuará en el Juzgado de instrucción de Cariñena.

Zaragoza, 3 de abril de 1937.—El Gobernador civil, Presidente de la Comisión, Julián Lasierra Luis.

Núm. 1.956.

De conformidad con lo previsto en el art. 6.º del Decreto-ley de 10 de enero último, he mandado instruir expediente sobre declaración de responsabilidad civil contra Francisco Goñi Mezquita, vecino de Cariñena, habiendo nombrado Juez instructor a D. Carlos Sanjuán de Pineda, que actuará en el Juzgado de instrucción de Cariñena.

Zaragoza, 3 de abril de 1937.—El Gobernador civil, Presidente de la Comisión, Julián Lasierra Luis.

Núm. 1.957.

De conformidad con lo previsto en el art. 6.º del Decreto-ley de 10 de enero último, he mandado instruir expediente sobre declaración de responsabilidad civil contra Miguel Soler Ferruz, vecino de Cariñena, habiendo nombrado Juez instructor a D. Carlos Sanjuán de Pineda, que actuará en el Juzgado de instrucción de Cariñena.

Zaragoza, 3 de abril de 1937.—El Gobernador civil, Presidente de la Comisión, Julián Lasierra Luis.

Núm. 1.958.

De conformidad con lo previsto en el art. 6.º del Decreto-ley de 10 de enero último, he mandado instruir expediente sobre declaración de responsabilidad civil contra Florencio Alvarez Tortajada, vecino de Cariñena, habiendo nombrado Juez instructor a don Carlos Sanjuán de Pineda, que actuará en el Juzgado de instrucción de Cariñena.

Zaragoza, 3 de abril de 1937.—El Gobernador civil, Presidente de la Comisión, Julián Lasierra Luis.

SECCION SEPTIMA

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Juzgados de primera instancia.

Núm. 1.904

JUZGADO NUM. 1

Cédula de notificación

En virtud de providencia de hoy del señor Juez de instrucción del Juzgado núm. 1 de Zaragoza en causa núm. 108 de 1935, contra Pedro Giménez Viñuel y otro, por robo, se notifica la sentencia recaída en dicha causa al citado procesado, por la cual se le condena a la pena de dos meses y un día de arresto mayor, accesorias, costas e indemnización.

Zaragoza, siete de abril de mil novecientos treinta y siete.—El Secretario judicial, Fernando Garcia Barsala.

Núm. 2.006.

JUZGADO NUM. 2

Cédulas de citación.

En virtud de lo acordado por el señor Juez de instrucción núm. 2, designado para la instrucción de expediente con el fin de declarar administrativamente la responsabilidad civil que se deba exigir a Eladio Gajón Garcés como consecuencia de su oposición al triunfo del movimiento nacional, se cita por medio de la presente cédula a dicho inculcado, que tuvo su domicilio en el pueblo de Cadrete y actualmente se ignora, así como su paradero, a fin de que dentro del término de ocho días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la presente comparezca ante este Juzgado, sito Democracia, 64 duplicado, personalmente o por escrito, donde puede alegar en su defensa lo que estime procedente, con apercibimiento que de no verificarlo le parará el perjuicio a que hubiere lugar.

Y para que sirva de citación en forma, extendiendo la presente, que firmo en Zaragoza a ocho de abril de mil novecientos treinta y siete.—El Secretario, Mariano Torrijos.

Núm. 2.007.

JUZGADO NUM. 2

En virtud de lo acordado por el señor Juez de instrucción del Juzgado núm. 2 de esta ciudad, designado para la instrucción de expediente con el fin de declarar administrativamente la responsabilidad civil que se deba exigir a Antonio Lozano Alegre como consecuencia de su oposición al triunfo del movimiento nacional, se cita por medio de la presente cédula a dicho inculcado, que tuvo su domicilio en el pueblo de Cadrete y actualmente se ignora, así como su paradero, a fin de que dentro del término de ocho días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente, comparezca ante dicho Juzgado, sito Democracia, 64 duplicado, bien personalmente o por escrito, donde puede alegar en su defensa lo que estime procedente, con apercibimiento que de no comparecer le parará el perjuicio a que hubiere lugar.

Y para que sirva de citación en forma, extendiendo la presente, que firmo en Zaragoza a ocho de abril de mil novecientos treinta y siete.—El Secretario, Mariano Torrijos.

Núm. 2.008.

JUZGADO NUM. 2

En virtud de lo acordado por el señor Juez de instrucción del Juzgado número 2 de esta ciudad, designado

para la instrucción de expediente con el fin de declarar administrativamente la responsabilidad civil que se deba exigir a Antonio Gracia Villalba, como consecuencia de su oposición al triunfo del movimiento nacional, se cita por medio de la presente cédula a dicho inculpado, que tuvo su domicilio en el pueblo de Cadrete y actualmente se ignora, así como su paradero, a fin de que dentro del término de ocho días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de la presente, comparezca ante dicho Juzgado, sito Democracia, 64 duplicado, bien personalmente o por escrito, donde pueda alegar y probar en su defensa lo que estime procedente, con apercibimiento de que de no comparecer le parará el perjuicio a que hubiere lugar.

Y para que sirva de citación en forma, extendiendo la presente en Zaragoza a ocho de abril de mil novecientos treinta y siete.—El Secretario, Mariano Torrijos.

Núm. 2.009.

JUZGADO NUM. 2

En virtud de lo acordado por el señor Juez de instrucción del Juzgado núm. 2 de esta ciudad, designado para la instrucción de expediente con el fin de declarar administrativamente la responsabilidad civil que se deba exigir a Julio Plano Tarín, como consecuencia de su oposición al triunfo del movimiento nacional, se cita por medio de la presente cédula a dicho inculpado, que tuvo su domicilio en el pueblo de Cadrete y actualmente se ignora, así como su paradero, a fin de que dentro del término de ocho días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la presente, comparezca ante este Juzgado, sito Democracia, 64 duplicado, personalmente o por escrito, donde puede alegar en su defensa lo que estime procedente, con apercibimiento de que de no verificarlo le parará el perjuicio a que hubiere lugar.

Y para que sirva de citación en forma, extendiendo la presente, que firmo en Zaragoza a ocho de abril de mil novecientos treinta y siete.—El Secretario, Mariano Torrijos.

Núm. 2.010.

JUZGADO NUM. 2

En virtud de lo acordado por el señor Juez de instrucción del Juzgado número 2 de esta ciudad, designado para la instrucción de expediente con el fin de declarar administrativamente la responsabilidad civil que se deba exigir a Lucio Benito Hernández como consecuencia de su oposición al triunfo del movimiento nacional, se cita por medio de la presente cédula a dicho inculpado, que tuvo su domicilio en el pueblo de Cadrete y actualmente se ignora, así como su paradero, a fin de que dentro del término de ocho días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la presente, comparezca ante este Juzgado, sito Democracia, 64 duplicado, personalmente o por escrito, donde puede alegar en su defensa lo que estime procedente, con apercibimiento de que de no verificarlo le parará el perjuicio a que hubiere lugar.

Y para que sirva de citación en forma, extendiendo la presente, que firmo en Zaragoza a ocho de abril de mil novecientos treinta y siete.—El Secretario, Mariano Torrijos.

Juzgados municipales.

Núm. 1.916.

FUENTES DE EBRO

D. Ildefonso Ramón, Juez municipal de Fuentes de Ebro;

En virtud de demanda de juicio verbal civil inter-

puesta por D. Angel Labadía Aramburo, industrial de esta plaza, contra D. Angel Laborda Artajona, cuyo domicilio se ignora, sobre reclamación de cuatrocientas cuarenta y siete pesetas, he acordado en providencia de esta fecha tenga lugar la celebración del correspondiente juicio verbal civil que se solicita el día veintisiete de los corrientes y hora de las once de su mañana, ante la Audiencia de este Juzgado municipal.

Habiéndose decretado el embargo preventivo solicitado por la parte demandante en los bienes del demandado.

Y con el fin de que comparezca en el día y hora señalados con las pruebas a su derecho pertinentes, se cita al mismo, bajo apercibimiento de que si no comparece se seguirá el juicio en su rebeldía.

Fuentes de Ebro a ocho de abril de mil novecientos treinta y siete.—El Juez municipal, Ildefonso Ramón.—El Secretario, (ilegible).

Núm. 1.916.

FUENTES DE EBRO

D. Ildefonso Ramón, Juez municipal de la villa de Fuentes de Ebro;

Hago saber: Que por el presente edicto se cita a don José Pueyo Haro, el cual tuvo su domicilio en esta villa y ahora se halla en domicilio desconocido, para que el día 27 de los corrientes, a las diez, comparezca ante la sala-audiencia de este Juzgado, sito Casa Ayuntamiento, a fin de celebrar juicio verbal civil que contra el mismo ha interpuesto D. José García Abadía, de ésta, en reclamación de doscientas treinta pesetas, bajo apercibimiento de que si no comparece se seguirá el juicio en su rebeldía, conforme previene el artículo 729 de la ley de Enjuiciamiento Civil.

Y que solicitado por la parte demandante, se ha decretado el embargo preventivo de los bienes del demandado.

Dado en Fuentes de Ebro a ocho de abril de mil novecientos treinta y siete.—El Juez municipal, Ildefonso Ramón.—El Secretario, (ilegible).

Núm. 1.916.

FUENTES DE EBRO

D. Ildefonso Ramón, Juez municipal de Fuentes de Ebro;

En virtud de demanda de juicio verbal civil interpuesta por D. Angel Labadía Aramburo, industrial de esta plaza, contra D. Antonio Lapuente Basa, cuyo domicilio se ignora, sobre reclamación de doscientas cuarenta y seis pesetas setenta y cinco céntimos, he acordado en providencia de esta fecha que tenga lugar la celebración del correspondiente juicio verbal civil que se solicita el día 17 de los corrientes y hora de las doce de su mañana, ante la Audiencia de este Juzgado municipal.

Habiéndose decretado el embargo preventivo solicitado por la parte demandante en los bienes del demandado.

Y con el fin de que comparezca en el día y hora señalado con las pruebas a su derecho pertinentes, se cita al mismo, bajo apercibimiento de que si no comparece se seguirá el juicio en su rebeldía.

Fuentes de Ebro a ocho de abril de mil novecientos treinta y siete.—El Juez municipal, Ildefonso Ramón.—El Secretario, (ilegible).